



PETRO:
LOS
CUESTIONA-
MIENTOS, LAS
DUDAS Y LAS
ENCRUCIJADAS



Pares

Fundación Paz & Reconciliación

León Valencia A.
Director

Esteban Salazar
Coordinador Democracia y Gobernabilidad

Daniela Garzón
Investigadora Nacional

Camilo Suárez
Investigador Nacional

Nataly Triana
Asistente de Investigación

Laura Fajardo
Asistente de Investigación

Ernesto Medrano
Asistente de Investigación

Junior Amin
Coordinador de Comunicaciones

Juan Manuel Rueda
Editor de Contenidos

Laura Sanabria
Diseño y Diagramación

María Camila Rodríguez
Diseñadora Web

Sebastián Solano
Community Manager

Sergio Saavedra
Realizador audiovisual

© Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2021
Calle 26B, 4A-45, piso 15, Bogotá D.C.
pares.com.co

Este informe se terminó de editar el 14 de junio de 2022.
Elaborado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Edición y diagramación por: Equipo de comunicaciones.

Introducción

Gustavo Petro llega a la segunda vuelta de 2022 en su tercer intento por ser presidente de Colombia. Su victoria parecía clara frente a Federico Gutiérrez, pero al final de la primera vuelta las tendencias electorales cambiaron y ahora se mide en un cabeza a cabeza con Rodolfo Hernández, el desconocido exalcalde de Bucaramanga que se ha declarado a sí mismo como el rey del TikTok.

Sobre Petro, en cambio, se ha dicho y se ha escrito mucho. Primero, sobre su paso por el M-19, al que ingresó después de haber fundado el grupo JG3, que intentó organizar el movimiento sindical en Zipaquirá. Petro fue expulsado del M-19 en 1984 y después de ello consiguió su primer cargo de elección popular: concejal de Zipaquirá. Volvió al M-19 con la organización política Carta al Pueblo y fue encarcelado en 1985, época en la que, según cuenta, fue víctima de tortura física. Después fue sentenciado a dos años de cárcel, que pagó en diferentes establecimientos penitenciarios. En medio de ello sucedió la toma del Palacio de Justicia. Tras salir de prisión fue acogido de nuevo por la guerrilla e hizo parte de su dirección nacional. Finalmente fue parte del acuerdo de paz firmado por el M-19 en 1989.

Petro ha tenido una larga vida política. Ha sido representante a la Cámara por Cundinamarca, por Bogotá, varias veces senador; fue diplomático de Colombia en Bélgica, nombrado por César Gaviria en medio de la violencia que acechaba a los miembros de la Unión Patriótica (UP) y de amenazas contra su vida; y alcalde de Bogotá. Ha aspirado tres veces a la presidencia y obtuvo ocho millones de votos en 2018, perdiendo frente a Iván Duque.

Su paso por el Congreso lo convirtió en una figura pública de relevancia nacional, pues desde allí denunció a varios parapolíticos, al cartel de la contratación en Bogotá, distanciándose así de su propio partido, el Polo Democrático en aquel entonces, e incluso fue uno de los primeros en denunciar los falsos positivos.

Petro y los traspiés en la alcaldía

Después de una primera campaña a la presidencia en 2010, en la que sacó un poco más de 1.300.000 votos, Gustavo Petro saltó a la alcaldía de Bogotá en 2012 con el movimiento Progresistas, en unas elecciones en las que obtuvo alrededor de 732.000 votos en la capital, y 8 de las 45 curules del Concejo. Esto hizo que la bancada de gobierno fuera minoritaria y que los roces con la oposición fueran constantes.

Como otros alcaldes, Petro tampoco pudo pasar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por el Concejo y su decisión de decretarlo fue suspendida por el Consejo de Estado. Por otro lado, uno de los temas centrales de su alcaldía fue la pelea con el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien lo destituyó e inhabilitó por quince años por el programa Basuras Cero que intentó sin éxito poner en marcha y con el que pretendía quitarle el negocio a los operadores privados.

Según la Procuraduría, la ciudad tuvo que afrontar una grave emergencia por cuenta de “la deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados con evidentes detrimentos del patrimonio público” y Petro habría violado los principios de libre competencia.

Aunque a través de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Petro logró quedarse en el cargo, sus peleas con Ordóñez desde el balcón del Palacio Liévano y las manifestaciones

a su favor ocuparon buena parte de la agenda política durante su gobierno y se convirtieron en una talanquera para avanzar en otros asuntos de importancia. Este no fue el único de los problemas que tuvo que afrontar. A pesar de sus manifestaciones contra las ganancias de los operadores de Transmilenio, no logró que se cambiaran sustancialmente las condiciones de repartición de los recaudos, y en cambio sí prorrogó los contratos de las fases 1 y 2. Esa prórroga implicó alargar la vida útil de los articulados en 240.000 kilómetros y aunque Petro defendió la decisión diciendo que a la postre la ciudad se ahorró \$76.000 millones, según los escenarios de renegociación estudiados por Valora esa cifra era muy baja con respecto a lo que podría haberse ahorrado la ciudad.

A su vez, Petro decidió congelar las tarifas del Transmilenio y reducir en el horario valle (de menor afluencia) las mismas y eso llevó a que tuviera que hacer frente a un proceso de responsabilidad fiscal llevado por la Contraloría de Bogotá. Solo hasta mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el fallo en el que se le encontró responsable fiscalmente, porque la Contraloría incurrió en una violación al debido proceso.

La Contraloría también le imputó cargos por la recompra de casi el 32% de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). En este caso, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) le compró las acciones a Citi Venture Capital Internacional, fondo del Citibank. La

Contraloría consideró en su momento que el modelo para establecer el valor de las acciones fue equivocado, y Petro se defendió diciendo que ese negocio fue el más rentable que hizo la EEB. La investigación fue archivada en 2018, al concluir que los estudios utilizados sí fueron adecuados.

Finalmente, otro de los problemas de su alcaldía fue el notable recambio de personal que tuvo. Solo para mayo de 2013, a un año y medio de iniciado su periodo, Petro había realizado 43 cambios en el gabinete, y al final, según el concejal de oposición del partido Cambio Radical Roberto Hinestrosa, en cuatro años se habrían hecho 65 cambios en total. De estos, los más relevantes fueron en la Secretaría de Gobierno, por la que pasaron seis secretarios; en Transmilenio, donde hubo seis gerentes; siete gerentes de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP); cuatro secretarios generales, tres en integración social, tres en movilidad, tres en ambiente y tres en salud.

Dos de las renuncias más escandalosas fueron las de Antonio Navarro de la Secretaría de Gobierno, al parecer por una pelea con Petro y uno de sus asesores, Álex Vernot, en marzo de 2012; y la de Daniel García Peña, entonces director de Relaciones Internacionales, por la salida de su esposa, María Valencia, de la Secretaría de Hábitat.

En su carta de renuncia, García Peña dijo que estaba desconcertado por la decisión y por la forma en la que se enteró Valencia de su salida (por

los medios de comunicación), y agregó sobre Petro que: “espero que seas capaz de utilizar tu inteligencia para reflexionar sobre las consecuencias del uso del poder y que acudas a tu valentía para reconocer errores”.

Es de ahí que proviene la creencia de que Petro no puede conformar equipos de trabajo duraderos porque rara vez oye a alguien y por eso se desarman rápido. Durante su carrera política, además, no ha podido permanecer demasiado tiempo en un partido político, de hecho, después de su salida del Polo, creó Progresistas; de ahí el proyecto de la Colombia Humana y con ella la coalición del Pacto Histórico (PH); todos muy coyunturales, variopintos y sin mayor capacidad de consolidarse.

Asimismo, Petro tampoco ha estado libre de escándalos, de los cuales el más sonado ha sido el del video revelado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, durante uno de los debates de control político al fiscal sobre Odebrecht, en el que se ve a Petro recibiendo fajos de billetes. Por ese motivo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le abrió una indagación preliminar, que archivó en 2021 porque no había conducta delictiva y porque los hechos habrían prescrito, pues es un video de 2005.

Petro y los clanes políticos en campaña

Aun cuando Petro ha construido su trayectoria política sobre la base de denuncias acerca de parapolíticos y entramados de corrupción, en esta campaña presidencial lo han acompañado varias personas con cuestionamientos y políticos tradicionales de los que antes no se había rodeado.

Los primeros en irse con él fueron dos de los miembros más emblemáticos del partido de la U y quienes en su época fueron uribistas pura sangre: Armando Benedetti y Roy Barreras, dos puntas de lanza que le han ayudado a consolidar su proyecto político. Hoy el primero es quien controla la agenda de Petro y el segundo lo asesora en su estrategia política.

Sobre Benedetti pesan varios cuestionamientos. Le han sido archivadas diversas investigaciones, la más reciente aquella que llevaba la Corte Suprema y que lo involucró con el grupo de los “bulldozer”, que habría hecho gestiones para favorecer a la multinacional brasilera Odebrecht. Actualmente tiene abierta una investigación sobre presunto lavado de activos y presunto enriquecimiento ilícito. La Corte intenta establecer si en el patrimonio de \$3.000 millones de pesos de Benedetti hay alguna irregularidad. En medio de las indagaciones, la Fiscalía ocupó ocho de sus inmuebles para extinción de dominio.

Recientemente, también ha sido involucrado en otro caso que lleva la

Corte Suprema sobre irregularidades en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Se investiga un presunto tráfico de influencias que se habría ejercido ante el exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de esa entidad, Jorge Iván Henao Ordóñez. En este caso ya aceptaron la responsabilidad los excongresistas Bernardo el “Ñoño” Elías y Musa Besaile, investigados por el escándalo de Odebrecht y el cartel de la toga, respectivamente.

La entrada de Benedetti a la campaña le ha significado a Petro ganar apoyos importantes en el Atlántico, en donde el candidato ya contaba con un caudal electoral importante. Allí, gracias a la cercanía de Benedetti con la casa política de los Torres Villalba, ha conseguido que esta se le una. Hoy esta familia tiene un representante a la Cámara, avalado por el Partido Liberal, Dolcey Torres, quien hace parte de la disidencia liberal que no quiso hacerle campaña a Federico Gutiérrez; y un senador en la lista del Pacto Histórico, Pedro Flórez.

Flórez es esposo de Karina Llanos Torres, diputada del Partido de la U y sobrina de Camilo Torres y Martha Villalba. Los Torres Villalba han hecho grandes eventos en respaldo a Petro.



Evento organizado por los Torres Villalba en respaldo de Gustavo Petro. Fuente: Cortesía

Los Torres Villalba son una familia que combina la política con los negocios. Mientras Camilo Torres y su esposa, Marta Villalba, han sido alcaldes de Puerto Colombia; Euclides Torres ha estado frente a las empresas familiares, dentro de las que se destacan las relacionadas con alumbrado público. Han sido aliados de los Char, y, de hecho, Dolcey Torres se eligió representante en 2022 siendo fórmula de uno de los candidatos apoyado por la poderosa casa política de Barranquilla en Senado, Carlos Rojano Llinás, exesposo de Aída Merlano y quien se quemó.

En Córdoba, por su parte, Petro ha conseguido el apoyo del Clan Calle. El actual líder de ese clan es Gabriel Calle Demoya, concejal de Montelíbano y

padre de Andrés Calle, representante a la Cámara por el Partido Liberal, y de Gabriel Calle, quien es el gerente de campaña de Petro en Córdoba.

Gabriel Calle Demoya también fue alcalde de Montelíbano y, para poder llegar al poder en 2011, contó con el apoyo de Musa Besaile y Bernardo “El Ñoño” Elías. En 2019 la Fiscalía judicializó a Calle Demoya y a Francisco Alean, el entonces alcalde de Montelíbano, por presuntas irregularidades de contratación en 51 convenios que “contemplaban obras como redes de acueducto, malla vial y plaza de mercado”, que habrían sido adjudicados “a dedo”. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se advirtió sobre diversas irregularidades de la contienda electoral de 2019, en la

que posan graves cuestionamientos contra el Clan Calle. El proceso ante la Fiscalía no ha avanzado. También, en marzo de 2022, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Calle Demoya y a otros tres concejales porque presuntamente el concejal Calle les habría entregado grandes cantidades de dinero sin un motivo que se haya podido esclarecer hasta la fecha.

En Córdoba Petro también habría recibido el apoyo del clan Jattin, que está liderado por la exsenadora investigada por parapolítica, Zulema Jattin. En uno de los eventos de campaña en Lórica, se vio en tarima a la cuestionada exalcaldesa de ese municipio, Nancy “Chofy” Jattin, prima de Zulema.

Por su parte, en Sucre, la campaña del PH tiene el apoyo del exsenador Mario Fernández Alcocer, a quien le han archivado investigaciones por vínculos con paramilitares y tiene otras investigaciones en la Corte Suprema activas. Fernández Alcocer heredó su curul a su esposa, Ana María Castañeda, y su entrada a la campaña de Petro fue confirmada por su prima, Verónica Alcocer, quien es la esposa de Petro.

En Antioquia, Petro en principio intentó hacer una alianza con Luis Pérez, exgobernador del departamento y candidato presidencial, que finalmente se abstuvo de llegar a la primera vuelta al verse sin posibilidades. Pérez ha sido cuestionado por su defensa de la Operación Orión cuando fue alcalde de Medellín y, según investigaciones de Pares, se habría beneficiado de un sofisticado mecanismo de

corrupción, sustentado en la creación de una sociedad mixta, llamada Valor +, sin el conocimiento de la Asamblea Departamental. Por medio de esa sociedad miles de millones de pesos habrían sido usados irregularmente.

Aunque la alianza con Pérez no prosperó, Petro logró quedarse con el apoyo de otro barón electoral antioqueño: el senador liberal Julián Bedoya, quien tiene su fortín electoral en el bajo Cauca, zona de influencia del Clan del Golfo, e hizo elegir en marzo a su fórmula en Cámara, Maria Eugenia Lopera, sin buscar la reelección. Sobre Bedoya, Pares denunció la falsedad de su título como abogado de la Universidad de Medellín, por lo cual la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal en abril de 2021.

También en Antioquia, aunque no se trata de un clan específicamente, Petro logró consolidar una alianza importante con el acalde de Medellín, Daniel Quintero, quien por su presunta injerencia indebida en política resultó siendo suspendido por la Procuraduría General de la Nación. Cabe recordar que esta decisión ha sido polémica, no solo por la responsabilidad propia de las actuaciones de Quintero, sino también porque la procuradora Margarita Cabello fungió como funcionaria del gobierno de Iván Duque y tuvo el presunto apoyo de los clanes políticos del Atlántico, como el clan Char, para llegar a su cargo.

Petro y Piedad Córdoba

Una de las personas más criticadas de la lista al Senado del Pacto Histórico (PH) es la hoy elegida senadora Piedad Córdoba. Durante los meses de campaña han sido varios los escándalos en los que se ha visto involucrada. Su hermano se encuentra detenido en La Picota, tras haber sido capturado y pedido en extradición por presuntos nexos con el narcotráfico.

A su vez, ella tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, en el que es testigo el presunto testaferro del gobierno de Nicolás Maduro, Álex Saab. Además, hace unas semanas fue

retenida en el aeropuerto de Palmerola, en Honduras, por llevar consigo US\$ 68.000 sin declararlos. Aunque pudo salir del país, el dinero le fue retenido porque no pudo demostrar su origen. Por último, un exasesor de campaña, Andrés Vásquez, la acusó de aconsejar el retraso de la liberación de Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por seis años por las Farc.

Los cuestionamientos contra Piedad Córdoba han sido de tal nivel que el mismo candidato presidencial Gustavo Petro le pidió que suspendiera actividades de campaña con el PH en abril, mientras resolvía sus líos judiciales.

Petro y el perdón social: la visita de su hermano a La Picota

Noticias Caracol publicó en abril una investigación periodística sobre la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota, al pabellón de la parapolítica. Esta visita se habría realizado el 8 de abril, autorizada por Franklin Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio y quien paga una condena por homicidio. Según lo revelado por Caracol, a la reunión asistieron una decena de presos, entre los que estaban Iván Moreno, excongresista condenado a 14 años de cárcel por el Carrusel de la Contratación en Bogotá; Ronald Housini, exgobernador de San Andrés condenado a 7 años por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos y peculado; Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado

a 18 años por peculado y celebración indebida de contratos y Álvaro García Romero, exsenador condenado por la masacre de Macayepo. Allí se habría hablado de una reforma a la justicia y de rebajas de penas.

Después se conoció un documento, supuestamente firmado por la campaña del PH, que habría circulado por la cárcel para ambientar la visita con promesas sobre tratos favorables de la justicia y que, según Noticias Uno, es falso, lo que implicaría que fue una visita planeada para enlodar la campaña.

Petro trató de justificar el hecho hablando del perdón social como un acuerdo de reconciliación o un tipo de amnistía.

El bombardeo de Revista Semana

El último escándalo en el que se ha visto envuelta la campaña del PH son las filtraciones de reuniones privadas hechas por la Revista Semana, la noche del 8 de junio. En múltiples grabaciones queda evidencia sobre estrategias de difamación contra los candidatos de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo; la planeación de la adhesión de Gaviria a la campaña antes de que se votara la primera vuelta, lo que incumple los acuerdos que tenían quienes participaron en la consulta de Centro Esperanza; y un acuerdo tácito de Petro con Vargas Lleras para no mover las maquinarias de Cambio Radical ni sumarse a la campaña de Federico Gutiérrez.

Además, en uno de los videos se oye a Roy Barreras hablado de las visitas al pabellón de extraditables, lo cual mostraría que, en efecto, tenían conocimiento de las mismas. Barreras ha salido a defenderse

diciendo que en las grabaciones no hay muestra de comportamientos ilegales y que las conversaciones fueron chuzadas.

La forma en que fueron publicadas estas grabaciones deja cuestionamientos sobre el origen de los videos y si su publicación es legal, tratándose de un presunto caso de espionaje o una filtración a la seguridad de la campaña de Petro.

Adicionalmente, se observa en los videos que en el círculo cercano a Petro no están figuras como Gustavo Bolívar, su otrora fiel escudero, ni su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. En contraste, hay figuras principalmente del santismo que parecieran haberse tomado el PH. Como se mencionó, están Roy Barreras, Armando Benedetti y Alfonso Prada, este último quien fungió desde 2017 como secretario general de Juan Manuel Santos en la presidencia.

En la recta final de la campaña

Desde el sorpresivo paso de Rodolfo Hernández a segunda vuelta han sido varios los tragos amargos para Petro y su aspiración presidencial. Sin duda Hernández, un outsider que se ganó 6 millones de votos impredeciblemente a punta de tiktoks y campaña en redes sociales, que desdeña de todos los políticos y que habla acabar él solo con “la robadera”, significa un escollo mucho más difícil de vencer que el candidato del oficialismo, Federico Gutiérrez, en el que el PH concentró buena parte de sus estrategias.

Las últimas semanas antes del 19 de junio, cuando se votará la segunda vuelta, han sido de una vertiginosa carrera de campaña cuestionable y de revelaciones que afectan a ambas partes. El petrismo parecía llevar la delantera sin tener que aplicar ninguna estrategia adicional, toda vez que Hernández es su propio enemigo, y cada cosa que sale sobre sus presuntos escándalos de corrupción, presiones a empleados, declaraciones polémicas y temerosas han hecho retroceder su popularidad y su capacidad de recoger los votos de Federico Gutiérrez, con los que en una suma simple ganaría.

Esto significó revertir la brecha de votos que se abrió el 30 de mayo entre Petro y Hernández. Según los tracking, Petro tiene casi dos puntos de ventaja (48,5 contra 46,7), según la encuesta de Invamer, con poco menos del 3% de margen de error, Hernández llega difícilmente al 48,2% en comparación con Petro en un 47,2%, en lo que sería un empate técnico en la intención de voto.

Sin embargo, el ataque, lanza en ristre, de Semana contra la campaña de Petro, con filtraciones que podrían venir de alguien de su círculo de máxima confianza, o de una filtración por una falla de seguridad, muestran no solo que todavía hay mucho trecho por andar, sino que probablemente existen divisiones internas. Incluso, el senador Gustavo Bolívar ha salido a rechazar los contenidos de estos videos y a plantear un ejercicio importante de autocrítica.

No obstante, medios como Semana, que han sido abiertamente antipetristas, están listos para cobrar cada cosa que puedan para evitar que Petro llegue a la Casa de Nariño. Esto, a la postre, podría inclinar la balanza de los indecisos hacia el voto en blanco o el abstencionismo. Petro ha sumado sin reparo todo lo que

ha podido para ser presidente: políticos tradicionales, clanes; ha gastado mucho más que la campaña de Hernández y tiene un ejército de voluntarios que hoy siguen saliendo a hacer campaña, utilizando hasta un kit para convencer indecisos. Las tensiones con su propia vida de denunciante de corrupción y de político antisistema son inocultables.

